



Atentado en Argentina contra el ex ministro boliviano coronel Arce: Muerto un guardaespaldas

COCHABAMBA (Bolivia). Efe. El ex ministro del Interior de Bolivia, coronel Luis Arce Gómez, sufrió un atentado en Córdoba (Argentina), en el que resultó muerto uno de sus guardaespaldas, informó el periodista argentino de «ATC» color de televisión canal siete de Buenos Aires, Sergio Francisco Jaime.

En declaraciones publicadas por el periódico «Hoy», destacó que «el pueblo argentino repudia la permanencia de militares bolivianos asilados en su territorio».

Resaltó que el ex presidente de Bolivia, general Luis García Meza y su ex ministro del Interior, coronel Luis Arce Gómez, cuentan en Argentina, donde llegaron poco después de la instauración de un Gobierno democrático en su país, con un ejército de agentes de seguridad. El periodista argentino manifestó que, en el caso de García Meza, el Gobierno Militar le ha proporcionado varios guardaespaldas argentinos. Informó que

el ex presidente boliviano ha adquirido una empresa frigorífica muy importante en Buenos Aires.

Jaime aseguró que, apenas se produzca la democratización de Argentina, el nuevo Gobierno civil responderá a la presión de su pueblo y expulsará del país a ambos jefes militares.

Se refirió igualmente a otro ex presidente de Bolivia el general Hugo Banzer Suárez (1971-1977) «que amasó una fortuna cuantiosa cuando estuvo asilado en Argentina». Mencionó que Banzer llegó a constituirse en el principal accionista de la industria Coca-Cola en Argentina.

Denuncias de sectores políticos opositores dieron cuenta los últimos meses sobre las presuntas actividades del ex ministro boliviano Arce Gómez, y manifestaron que organiza en la frontera boliviano-argentina actividades terroristas en contra del actual Gobierno democrático de Hernán Siles Zuazo.

Los militares justifican su actuación y consideran muertos a los «desaparecidos»

Toda Argentina critica el informe de la Junta sobre la lucha antisubversiva

El documento afirma que «únicamente el juicio histórico podrá determinar la exactitud de a quién corresponde la responsabilidad directa de métodos injustos o muertes inocentes». El informe, que no proporciona cantidad ni nombre de los «desaparecidos», ha sido criticado con dureza por sectores políticos y sindicales y por las organizaciones de defensa de los derechos humanos.

Santiago Palacios
CORRESPONSAL

BUENOS AIRES. Una ola de críticas y repudio levantó el informe sobre los derechos humanos que difundió el Gobierno de las Fuerzas Armadas, el cual anunció que «quienes figuren en las nóminas de desaparecidos y no se encuentren exiliados o en la clandestinidad, a los efectos administrativos y jurídicos se consideran muertos».

La declaración militar fue emitida a toda la nación por radio y televisión, acompañada con imágenes de la violencia desatada en Argentina a comienzos de la década de los 70.

ACTA INSTITUCIONAL

Simultáneamente, la Junta Militar dictó un acta institucional mediante la cual todas las conducciones militares emergentes del golpe de Estado de 1976 «asumen la responsabilidad histórica de todas las operaciones contra el terrorismo».

El comunicado sobre los «desaparecidos» afirma también que «únicamente el juicio histórico podrá determinar la exactitud de a quién corresponde la responsabilidad directa de métodos injustos o muertes inocentes».

Tras tomar estado público, el informe fue criticado duramente por los sectores políticos, sindicales y también por las organizaciones que se dedican a la defensa de los derechos humanos.

El informe sobre «desaparecidos», que sufrió varias postergaciones a raíz de los diferentes criterios existentes en el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, detalla que entre 1969 y 1979 se registraron en el país 21.642 hechos terroristas y que la estructura subversiva llegó a contar en su apogeo con

25.000 militantes, de los cuales 15.000 fueron combatientes, y recuerda «la masacre del 20 de junio de 1973, cuando Perón regresó a Argentina».

Se dice también que las Fuerzas Armadas «operaron contra la acción terrorista orgánicamente bajo sus mandos naturales» y que «aquellas acciones que como consecuencia del modo de operar pudieron facilitar la comisión de hechos irregulares y que fueron detectados, han sido juzgados y sancionados por los consejos de guerra».

El informe —que no brinda cantidad ni nombre de los «desaparecidos»— explica que muchas personas cuyo paradero se desconoce se hallan en el extranjero con documentación falsa o bien han sido eliminadas por las propias organizaciones subversivas.

En otro apartado se señala que para formular cualquier aclaración el Gobierno pone a disposición de la ciudadanía la nómina de los integrantes de las organizaciones terroristas condenados y bajo proceso y detenidos a disposición del poder ejecutivo; peticiones de paradero registradas en el Ministerio del Interior desde 1974; peticiones de paradero solucionadas por vía judicial y bajas producidas por la acción terrorista. Finalmente, las Fuerzas Armadas expresaron que las informaciones y explicaciones proporcionadas en el citado documento es todo cuanto las Fuerzas Armadas disponen para dar a conocer a la nación sobre los resultados y consecuencias de la represión al terrorismo.

REACCIONES

La declaración, de tono enunciativo y que no aportó mayores novedades a lo que la ciudadanía sabía sobre la cuestión, mereció la inmediata reprobación de los par-



Mientras la Junta Militar da por muertos a los «desaparecidos», sus familiares siguen pidiendo por ellos.

tidos políticos. La «multipartidaria», en forma individual, expresó su disconformismo. El peronista Antonio Cafiero dijo «que no es admisible pretender bajar el telón sobre los excesos en la represión por un decreto militar», en tanto el radical Fernando de la Rúa afirmó que «el documento de las Fuerzas Armadas sigue dejando un vacío que exige aclaración».

El desarrollista Rogelio Frigerio manifestó que «el informe carece de algo sustancial: la verdad», en tanto Oscar Alende, titular del Partido Intransigente, lo calificó simplemente de «inadmisible». La Democracia Cristiana, el quinto integrante del pentágono político, señaló en una nota que el documento militar es «unilateral, irresponsable y grotesco».

Las dos centrales de trabajadores CGT-Brasil y CGT-Azopardo, de tendencia intransigente y conciliadora, respectivamente, también descalificaron la explicación que las Fuerzas Armadas ofrecieron sobre los excesos represivos.

También las ocho organizaciones que se dedican a la defensa de los derechos humanos también hicieron conocer su repudio.

Las Madres de Plaza de Mayo, que bajo una lluvia torrencial manifestaron ante la Casa de Gobierno y protagonizaron un incidente con el jefe de la Policía expresaron que aceptar la explicación de las Fuerzas Armadas se asemejaría a haber permitido a Hitler comentar en una conferencia de prensa el exterminio de seis millones de judíos.

Las «Madres» durante la concentración del jueves, protagonizaron un incidente con un grupo de policías que trataron de impedir la reunión, y los obligaron a retirarse en medio de empujones e insultos. El propio jefe policial, general Sasiain, debió huir presuroso en su automóvil ante la actitud de las «Madres», quienes incluso llegaron a golpear el vehículo.

Las «Madres» se preguntaron si «secuestrar, torturar, asesinar, mentir con total

descaro, son actos de servicio», y afirmaron que «sólo la impudicia y la desvergüenza pueden calificar así estos crímenes».

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, a su vez, expresó que «la Junta Militar, en un vano y soberbio intento de poner punto final al grave problema de la violación de los derechos humanos, produce un informe que desprecia la vida al no dar respuesta sobre miles de detenidos-desaparecidos».

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) dijo que «las Fuerzas Armadas ponen de manifiesto su cobarde ocultamiento de los crímenes cometidos y niega la justicia al justificar el terrorismo de Estado».

«PRINCIPIO INMORAL»

Por otra parte, informa «Efe», el obispo de Viedma, monseñor Miguel Heayne, afirmó ayer que el documento de la Junta «se apoya en un principio totalmente inmoral, como es el que el fin justifica los medios».

Señaló que el informe «no ha sido en absoluto un paso hacia la reconciliación» y que es sólo «una síntesis de lo que se viene diciendo sobre el tema, desde un ángulo de autodefensa y nada más». Heayne dijo que el informe «no detesta en ningún momento el procedimiento de la represión».

«No basta la verdad a medias. Es cierto que ha existido terrorismo, pero es cierto también que la represión ilegítima, como decimos en el documento «La Iglesia y la comunidad», ha enlutado tanto o más a la patria como los actos terroristas», puntualizó Heayne.

El obispo señaló que a esa represión se la puede catalogar «como un terrorismo de Estado» y acordó que «lo que más llama la atención y nos mueve a nosotros, como Iglesia y como cristianos, es que usando la palabra reconciliación en ningún momento se detesta el procedimiento de la represión, apoyado en un principio totalmente inmoral como es el que el fin justifica los medios».

Anuncian que regresarán si, como ya ha anunciado Londres, les impiden el paso

Familiares de soldados argentinos muertos en la guerra partirán hoy hacia las Malvinas

BUENOS AIRES. Efe. El presidente del Centro de Voluntarios por la Patria, Osvaldo Destéfani, confirmó ayer que el buque argentino «Lago Lacar» partirá el sábado a primeras horas de la tarde hacia las Malvinas.

Destéfani agregó que con el fin de salvaguardar la seguridad de los pasajeros «regresaremos inmediatamente a Buenos Aires» si los británicos nos impiden el paso hacia las islas Malvinas.

Destéfani dijo que recibió comunicaciones desde Gran Bretaña en las que «me dicen que todo el pueblo inglés está con nosotros» y que quienes se oponen al viaje «son la primera ministra, Margaret Thatcher, y su grupito».

El «Lago Lacar» llevará a bordo 48 familias de solda-

dos argentinos muertos en el conflicto del Atlántico Sur y enterrados en las Malvinas, 52 tripulantes y un reducido grupo de periodistas argentinos y británicos.

Destéfani dijo que «haremos el viaje con los familiares de los soldados muertos en la guerra, pero en ningún momento pienso comprometer su seguridad».

Explicó que «si al llegar a la zona de exclusión de las 150 millas los ingleses nos detienen, haremos allí mismo un homenaje que consistirá en una misa en cubierta y lanzamiento de flores al mar, y de inmediato regresaremos a Buenos Aires».

Destéfani consideró «improbable» que las fuerzas británicas asentadas en las islas «puedan hacernos al-

gún daño. Creo que se limitarán a cerrarnos el paso, cosa que, por supuesto, nosotros acataremos».

Admitió que está dispuesto a «negociar con los británicos» en caso de permitirse llegar a Puerto Argentino (Puerto Stanley) para que «únicamente los familiares, y me incluyo porque un primo mío murió en la guerra, bajen a tierra».

Señaló que en ese caso «podría aceptarse una condición de los ingleses en el sentido de que sólo bajen los familiares y los periodistas permanezcan a bordo».

El capitán del «Lago Lacar», Jorge Bernasconi, advirtió que «al menor signo de enfrentamiento» durante la travesía o en las cercanías de Puerto Argentino «nos volvemos a Buenos Aires».

Manifestó que su principal preocupación es cuidar de «que no se altere la seguridad» de los pasajeros y la tripulación.

Destéfani dijo, además, que «únicamente si los ingleses me garantizan por escrito la seguridad de los familiares, aceptaré que bajen en Puerto Argentino».

Descartó luego que el Gobierno argentino pueda impedir la salida del «Lago Lacar» y consideró que eso «sería una medida muy impopular, de manera que no creo que suceda algo así».

Informaciones procedentes de Londres hicieron saber al jueves que el Gobierno británico no permitirá el acceso a las islas Malvinas del grupo de familiares de soldados argentinos que viajará en el «Lago Lacar».